

CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

ACTUALIZACIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 10126-15

REFERENCIA	Proyecto de Ley que Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y modifica las normas que señala
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados; pasó al Senado en Segundo Trámite Constitucional
COMISIÓN	de Obras Públicas; y a la de Hacienda, en lo que corresponde
INGRESO	16 de junio de 2015; con fecha 4 de abril de 2017 pasó a Segundo Trámite Constitucional
ARTICULADO	En su texto original, el Mensaje contemplaba tres artículos permanentes y tres artículos transitorios. El texto que pasa a Segundo Trámite, contiene seis artículos permanentes y tres disposiciones transitorias; es el que se analiza en este informe

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD


El proyecto de ley crea la Dirección General de Concesiones, como servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas, afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, a cargo de un Director General, y cuyo personal se regirá por la legislación aplicable a los funcionarios públicos, esto es, Estatuto Administrativo y Escala Única de Sueldos.

Al efecto, el personal que ejerce funciones en la actual Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, una unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, será traspasado al nuevo servicio, creándose para ello una nueva planta de personal, e incrementándose la dotación.

Si bien en lo organizacional del servicio se rescata el hecho que se incentiven concursos y valore la experiencia, en lo estrictamente presupuestario no parece un momento adecuado para crear nuevos cargos en la Administración del Estado e incrementar el gasto en personal, más aún tratándose de un año de elecciones, donde el proyecto ha tomado mayor premura en su discusión y ahora se tramita con urgencia. Esto, pues no hay garantías de una mejor gestión, o que la creación de esta institucionalidad ayude a lograr una planificación permanente con horizonte a mediano y largo plazo, y que en definitiva disminuya la brecha para dar efectivo cumplimiento a la agenda de proyectos de infraestructura.

El aspecto remuneracional del personal de la Dirección adquiere una importancia relevante, lo que hace peligrar el punto de vista final del proyecto, que es potenciar la construcción de obras públicas mediante el mecanismo de la concesión ■■■

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

1. Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, un servicio centralizado dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
2. Su objeto es la ejecución, reparación, mantención y explotación de obras públicas fiscales y la provisión de equipamiento o la prestación de servicios asociados, así como la fiscalización del debido cumplimiento de las normas legales y administrativas aplicables a los contratos de concesión, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes.
3. La nueva Dirección asumirá la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Le corresponderá por ello, continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley, tenían a su cargo.
4. Estará a cargo de un Director General nombrado por el Presidente de la República, que tendrá la calidad de alto directivo público y estará bajo la dependencia del Ministro de Obras Públicas.
5. La Dirección estará, en cuanto a las normas sobre la carrera funcionaria, afecta al Sistema de Alta Dirección Pública.
6. El personal se regirá por las disposiciones del Estatuto Administrativo, y en materia de remuneraciones, por las normas del decreto ley que fija la Escala Única de Sueldos.
7. El personal tendrá una asignación especial en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización.
8. Se delega en el Presidente de la República, a través de un decreto con fuerza de ley, la fijación de las plantas de personal de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y dictar todas las normas necesarias para su adecuada estructuración y operación. Además del traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas 

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO

Cada cierto tiempo, resurge la discusión en torno a la efectividad del modelo de concesiones. Hace unos días, se conoció un análisis que revisó el ritmo de construcción de recintos hospitalarios, que consideró el tiempo que llevan en obras y su estado de avance, según datos del Ministerio de Salud, donde se observó que aquellos concesionados avanzan tres veces más rápido que los construidos directamente con recursos estatales.

Hoy las críticas se consolidan en torno a por qué la presente Administración cometió el error de descartar el uso de las concesiones, pese a que en la “Agenda Concesiones Infraestructura, desarrollo e inclusión Chile 30 30” del Ministerio de Obras Públicas¹ del año 2015, se destacaron sus beneficios señalando que el Estado Chileno en 10 años cuadruplicó la inversión pública en infraestructura, y que las modalidades para incluir la asociatividad público-privada al desarrollo del área, como la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública, cooperaron sin duda para generar estos avances.

EL PROYECTO

El proyecto de ley, que lleva dos años de tramitación en el Congreso Nacional, pues fue ingresado el 16 de junio de 2015, de acuerdo a su mensaje, busca crear la Dirección General de Concesiones plantea dentro de las funciones principales de esta nueva unidad, el fortalecer “la promoción del mecanismo y la cartera de proyectos entre inversionistas y financistas, nacionales y extranjeros”, en coordinación con las demás instituciones competentes en esta materia. Asimismo, busca “estudiar, analizar y proponer al Ministro de Obras Públicas proyectos que puedan ser promovidos y ejecutados mediante el sistema de concesiones, sean éstos de iniciativa propia, de otros ministerios u organismos de la administración pública o de iniciativas privadas”.

Al efecto, este estuvo gatillado, entre otras motivaciones por la Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, más conocida como “Comisión Engel”, que trató en particular este tema y propuso una serie de mejoras en materias sobre el sistema de compras públicas, concesiones y gastos en defensa². Junto con reconocer que programa de concesiones que se inició hace dos décadas hizo una importante contribución a la modernización de la infraestructura pública del país, propuso lo siguiente:

¹ Disponible en http://www.concesiones.cl/Agenda_2014-2020/Documents/Brochure%20general%202015.pdf

² Disponible en http://consejoanticorruptcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorruptcion.pdf

- Fortalecer la unidad de diseño y planificación de proyectos de concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para con ello reducir el riesgo de captura asociado a la debilidad actual para diseñar proyectos.
- El panel de expertos debe visar que las iniciativas privadas de concesión de Obras Públicas efectivamente tengan un componente de originalidad que justifique los cuantiosos subsidios que contempla la utilización de dicha modalidad.

La iniciativa, que pasó a Segundo Trámite, y que ya se encuentra en discusión en la Comisión de Obras Públicas del Senado, reconoce cómo la asociación público-privada ha contribuido a disminuir significativamente la brecha existente entre necesidades y disponibilidad de infraestructura y cómo este sistema ha logrado una fuerte inversión nacional y extranjera, pasando a constituir una política de Estado avalada transversalmente.

Sin embargo, una de las falencias que en la materia ha detectado la Administración es la institucionalidad. Al efecto, el Ejecutivo señala que se deben fortalecer las capacidades orgánicas del Estado y para ello promueve la creación de un nuevo servicio, pues el marco legal que rige las concesiones se ha ido perfeccionando en el tiempo y requiere de mejoras.

Sin perjuicio del claro objetivo a lograr, el principal problema que se ha presentado en el Sistema de Concesiones, ha sido la determinación sobre qué proyecto se va a licitar, lo que actualmente se traduce en un problema de gestión. Pese al diagnóstico compartido en cuanto a la necesidad de mejorar la gestión para promover el desarrollo de infraestructura a través de mecanismos

eficientes, la discusión del proyecto no se ha centrado en ello, pues ésta ha versado sobre aspectos remuneracionales de los funcionarios a cargo de ello.

INSTITUCIONALIDAD ORGÁNICA Y FUNCIONES

El Proyecto se fundamenta en que durante todo este periodo no se han regulado los aspectos relativos al marco institucional del servicio encargado de desarrollar el sistema de concesiones, de hecho, ha sido la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, una unidad administrativa funcional dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la que se ha encargado de implementar el programa, haciéndose por tanto necesario, contar con una nueva institucionalidad que facilite enfrentar desafíos más ambiciosos a mediano y largo y, de esta manera, potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones.

El proyecto de ley, por tanto, crea la mencionada Dirección, como servicio centralizado dependiente del Ministerio de Obras Públicas, afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, a cargo de un Director General, y cuyo personal se regirá por la legislación aplicable a los funcionarios públicos, esto es, Estatuto Administrativo y Escala Única de Sueldos.

Ésta tendrá como objeto la ejecución, reparación, mantención y explotación de obras públicas fiscales, y la provisión de equipamiento o la prestación de servicios asociados, como también

la fiscalización del debido cumplimiento de las normas legales y administrativas aplicables a los contratos de concesión, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes.

Para ello, recogerá las prácticas y procesos de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, alojando en la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGCOP) las funciones y atribuciones que permitan desarrollar todo el proceso de la infraestructura concesionada, desde la evaluación de la idea hasta el término de la fase de explotación.

Pese a lo interesante y necesario que es la importancia de la gestión en concesiones, el proyecto en sí no se ha concentrado en ello pues, la discusión sólo ha versado sobre aspectos relacionados con la remuneración de los funcionarios de la Dirección, viéndose, de hecho, entrampada en su Primer Trámite Legislativo en la Cámara de Diputados, ante peticiones del personal que será traspasado al nuevo servicio.

RÉGIMEN DEL PERSONAL

Se crea en este órgano de la administración de Estado una nueva planta de personal adscrita al Estatuto Administrativo y al sistema de remuneraciones de la Escala Única de Sueldos. De esta forma, se delega a decretos con fuerza de ley, que una vez aprobada la esta iniciativa, el Presidente de la República fijará la estructura y planta de dicho organismo.

El personal actual de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas pasará a formar parte de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas manteniendo su actual nivel de remuneraciones, pero ello no es todo, pues de acuerdo al Informe Financiero N° 83, del 15 de junio de 2015, de la Dirección de Presupuestos³, se incrementa el número de la dotación del personal en hasta 15 personas con un costo \$650 millones.

Al efecto, luego de más de un año de discusión y firma de un protocolo de acuerdo entre el MOP, DIPRES y la Asociación de Trabajadores de la Coordinación de Concesiones, el 27 de enero del presente año, se acordó el traspaso de la mayoría de los trabajadores que hoy se encuentran a horarios en la Coordinación a la nueva Dirección, donde estarán adscritos a la Escala única de Sueldos, al Sistema de Alta Dirección Público en caso de ser Directivos. Junto con ello, se crea una “asignación especial” con un máximo de 72 cupos, sumado a 35 nuevos cupos para recibir la asignación por desempeño de funciones críticas y reconocimiento del tiempo servido a honorarios para en la Coordinación para la aplicación de incentivos al retiro.

De esta forma, de acuerdo a un nuevo informe financiero N° 25 de 20 marzo de 2017, que acompaña indicaciones presentadas ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, se considera un gasto fiscal de \$ 650 Millones para incrementar la dotación, un monto de \$545 millones para financiar la asignación especial que se crea, y \$717 millones para los efectos del pago de la asignación de funciones críticas. Es decir, la nueva Dirección hará lo mismo de antes, pero a un mayor costo fiscal, siendo los

3 Disponible en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-132496_doc_pdf.pdf

únicos beneficiados directos los funcionarios públicos.

Si bien en lo organizacional del servicio se rescata el hecho que se incentiven concursos y valore la experiencia, en lo estrictamente presupuestario no parece un momento adecuado para crear nuevos cargos en Administración del Estado e incrementar el gasto en personal, más aun tratándose de un año de elecciones, donde el proyecto ha tomado mayor premura en su discusión y ahora se tramita con urgencia. Esto, pues no hay garantías de una mejor gestión, o que la creación de esta institucionalidad ayude a lograr una planificación permanente con horizonte a mediano y largo plazo, y que en definitiva disminuya la brecha para dar efectivo cumplimiento a la agenda de proyectos de infraestructura.

Finalmente, cabe recordar que las concesiones se encuentran trabadas por una discusión ideológica y la falta de capacidad de gestión que ha tenido el Gobierno en llevar a cabo una cartera de proyectos, donde esta iniciativa poco ayuda. Hubiese sido esperable que se presentase un proyecto que tuviera como foco promover la inversión e incentivar el mecanismo de concesiones, pero el resultado es un proyecto ad hoc a los requerimientos de los funcionarios, y que no se ve como impulsará la concreción de los desafíos pendientes que en infraestructura tiene el país.

DESAFÍOS EN INFRAESTRUCTURA

Uno de los aspectos más relevantes cuando se revisan los desafíos que debe asumir una economía que quiere alcanzar el desarrollo, son las inversiones en infraestructura. Al efecto, Chile se propuso alcanzar un ingreso de USD\$30.000 per cápita en el año 2030 y para ello se quiere de obras en esta área. Así, el Gobierno se había comprometido en nuevas obras de infraestructura, que alcanzarían una inversión del 3.5% del PIB de Chile, a través de inversiones directas del Estado por Gasto Público, como inversiones vía Sistema de Concesiones.

Esta agenda contemplaba obras por un total potencial de US\$ 11.090 millones, que se ejecutarían entre los años 2014 y 2020, considerando proyectos de Asociación Público-Privada, que buscaban, como lo señaló dicho anuncio, servir para la reactivación económica y porque en su conjunto adelanta inversiones, genera empleo y dinamiza la economía.

Sin embargo, y pese al consenso que existe entre la relación que hay entre el crecimiento económico y la inversión, el país dejó de lado dicho camino y hoy, según la agenda de concesiones existe un déficit en obras de infraestructura de más de US\$ 150.000 millones. Sin duda no todo ello le corresponde a obras públicas, pero existe una gran cuota de responsabilidad, y por ello, a quien se termina perjudicando, es a la ciudadanía. Un ejemplo de esto, es que sólo se han terminado 5 de los 20 hospitales comprometidos para 2018, y la ejecución del presupuesto de inversión del Ministerio de Salud deja bastante que desear. Con un 64% el 2015 y un 61% de ejecución el 2016, queda de manifiesto la falta de gestión.

Como se sabe, las concesiones se encuentran trabadas por una discusión ideológica y la falta de capacidad de gestión que ha tenido el Gobierno en llevar a cabo una cartera de proyectos. Por el contrario, éste se ha abocado de la institucionalidad, creando el Servicio que se analiza y en la creación una nueva Empresa del Estado, denominada “Fondo de Infraestructura S.A.”⁴, que poco tiene de fondo y mucho de Estado empresario.

Cabe hacer presente, que el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura, y que actualmente está en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, en su Primer Trámite Constitucional, busca autorizar al Estado “para desarrollar las actividades empresariales de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento o inversión referidas a proyectos de infraestructura, incluidos los servicios anexos a los mismos, sobre bienes cuya administración sea de su competencia, en conformidad y con estricta sujeción a lo dispuesto en esta ley”. Aunque la iniciativa cuenta con apoyo transversal, lo cierto es que su eventual atractivo merece ser revisado, atendida la forma en que esta empresa financiará sus operaciones. Esto, pues la empresa captaría recursos del sector financiero, endeudándose contra sus eventuales ingresos futuros, lo que no es otra cosa que financiarse vía endeudamiento. Se trata del valor presente de los peajes futuros de aquellas obras que retornan al Fisco al terminar el periodo de concesión.

Dicho lo anterior, si lo que se quiere es acudir a mecanismos de reactivación, la primera tarea es solucionar los problemas políticos que generan

las concesiones y terminar con la discusión ideológica que se ha generado en torno a ellas. Se deben evidenciar los beneficios de ellas y mejorar la gestión del Ministerio de Obras Públicas, de modo tal de incentivar nuevas carteras de proyectos.

El desarrollo de infraestructura es un tema pendiente, y aunque hay certeza en que es un mecanismo de estimulación de la economía, poco y nada se ha hecho para impulsarlo, y aunque se ha indicado que es necesario mejorar la institucionalidad, lo cierto y como se verá, es poco lo que aporta esta iniciativa.

EL SISTEMA DE CONCESIONES

El sistema de concesiones ha viabilizado en Chile las grandes obras de infraestructura que se conocen. Este mecanismo, ha permitido suplir brechas, sobre todo en obras viales, donde en los años noventa un poco más del 11% de la red vial de la época se encontraba pavimentada. Desde la primera licitación en el año 1992, vía concesiones se han adjudicado más de 80 proyectos con un monto que supera los US\$19.000 millones en inversión.

La concepción del sistema de concesiones como política pública, tuvo como eje, como se ha dicho, disminuir el déficit en infraestructura en el que se encontraba el país. Al efecto este “progresivamente se estaba transformando en un ‘cuello de botella’ para el crecimiento, la competitividad de nuestra producción y la

4 Boletín N° 10.647-09, ingresado el 4 de Mayo de 2016.

calidad de vida de la población”⁵. Su principio rector era lograr consolidar un mecanismo a través del cual “el sector privado financiara obras de infraestructura económicamente rentables, recuperando su inversión durante el periodo de explotación de la obra, y traspasándola posteriormente al Estado, liberando así recursos públicos para proyectos de alta rentabilidad social”⁶.

En tal sentido, entre objetivos específicos que contribuyeron a alcanzar el objetivo general se destacan:

1. “Diseñar una legislación atractiva para incentivar la participación del sector privado, objetivo que fue complementado con el esfuerzo de las autoridades por perfeccionar esa normativa en el tiempo, solucionando problemas que surgieron en el camino.
2. Fomentar la participación de nuevos actores, buscando activamente incentivar a empresas, principalmente extranjeras, con experiencia en financiamiento y construcción de grandes proyectos.
3. Generar condiciones competitivas en la industria. Se estimó que, ante la imposibilidad de promover competencia en la cancha, una solución era competir por acceder a ella. Esta buscaba evitar la concentración de actividades solo en algunas empresas nacionales, cautelando el funcionamiento eficiente

y transparente de este mercado, con licitaciones públicas y abiertas, también para actores internacionales.

4. Crear una institucionalidad especial, dentro del marco del MOP, que incentivara prácticas más flexibles, propias de un modelo nuevo de desarrollo de infraestructura basado en la APP, que culminó en la creación de la Coordinación de Concesiones, una entidad originalmente transitoria, y que se demostró precaria para la envergadura de la tarea.
5. Promover la participación del sistema financiero en un nuevo modelo de negocio, factible de transformarse en una palanca para su propia profundización. Un elemento destacado en este desarrollo fue el perfeccionamiento de fórmulas para compartir en forma eficiente los riesgos entre el sector privado y el público.
6. Mejorar la calidad del transporte para beneficio de la comunidad, mediante la disminución de la contaminación y los tiempos de viaje, y el aumento de la seguridad vial. Esto fue esencial para legitimar en el tiempo el concepto de “el que usa paga”, práctica que en carreteras de Chile data de varias décadas. La conciencia del pago se asocia a la idea de que, en una sociedad moderna, el uso del automóvil en un camino o una autopista de calidad no es un “derecho social” sino un privilegio, que implica costos y responsabilidades, al igual que el costo de la bencina, la revisión técnica o el permiso de circulación del vehículo

⁵ Concesiones de Obras Públicas en Chile 20 años, Ministerio de Obras Públicas, 2016.

⁶ Ibidem

7. Reasignar recursos para financiar obras de impacto social, no rentables privadamente, o que no permiten un pago por beneficio, y cuyo objetivo es la integración y el desarrollo productivo de la comunidad, como los programas de caletas pesqueras, aeródromos, agua potable rural y obras de riego pequeñas y medianas.”⁷

La concesión de obra pública es un contrato administrativo celebrado entre un organismo del Estado y un particular, con el fin de encomendar a este último la ejecución de una obra para uso público y facultarlo para recuperar la inversión y obtener una ganancia, mediante el cobro de una tarifa o peaje a quienes utilicen la obra (generalmente una carretera, túnel o puente).

Para la celebración de una concesión se sigue previamente un procedimiento administrativo, cuyas bases son materia de ley según lo dispone el artículo 63, N° 18, de la Constitución Política, que otorga ese carácter a “las normas que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública”.

Cabe hacer presente que la obra entregada en concesión es un servicio público, por lo cual el concesionario está obligado a prestarlo ininterrumpidamente, salvo situaciones excepcionales, debidas a caso fortuito o fuerza mayor, y sin discriminación de ninguna especie a los usuarios, siempre que éstos cumplan con las condiciones del servicio y con el pago de las tarifas autorizadas en el contrato de concesión.

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas⁸, el marco normativo aplicable a los contratos de concesión, es el siguiente:

- i. Decreto Supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de 1960.
- ii. Decreto con Fuerza de Ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 19.252 de 1993 y 19.460 de 1996, cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado en el Decreto Supremo N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas.
- iii. El Reglamento de Concesiones
- iv. Las bases de licitación y sus circulares aclaratorias.
- v. La oferta técnica y económica presentada por el adjudicatario de la concesión, en la forma aprobada por el MOP
- vi. El decreto de adjudicación respectivo.

De acuerdo a lo anterior, la concesión, está regulada por normas comunes emanadas de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, sin embargo, cada contrato tiene además su regulación especial en las propias bases que

7 Véase la nota precedente.

8 Decreto Supremo N° 956, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.

convocan el concurso y el procedimiento seguido al efecto. Ello pues cada proyecto a concesionar obedece a criterios distintos en cuanto al diseño, niveles de servicio y construcción, en su explotación, modelos económicos aplicables y la interacción con autoridades, usuarios y comunidades, pues existen diferencias entre llevar a cabo una obra vial, de un establecimiento hospitalario, carcelario, de obras portuarias o aeroportuarias.

Lo anterior busca consagrar el necesario dinamismo del Sistema, así la ley con sólo 43 artículos permanentes, establece los mínimos que se deben considerar en todo contrato de concesión de obra pública, dejando la regulación de las particularidades a las bases y los contratos.

Tal como lo ha reconocido el MOP, se consagró en la legislación una mirada de largo plazo, ya que tanto los proyectos en sí como su regulación contractual han ido cambiando durante los años de operación del sistema. De la misma forma, la naturaleza y condiciones de la infraestructura concesionada y de sus servicios conexos se ve exigida en el tiempo, requiriendo adecuaciones y actualizaciones para mantener sus niveles de funcionalidad. “De esta manera, una normativa rígida o restrictiva hubiese sido una limitación para el desarrollo de proyectos de distinta naturaleza y para la posibilidad de innovar en la cartera de concesiones”⁹ ■■■

9 Concesiones de Obras Públicas en Chile 20 años, Ministerio de Obras Públicas, 2016.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas:

1. Elimínase la letra g)¹⁰ del artículo 14.
2. Incorpóranse los siguientes artículos 22 bis, 22 ter y 22 quáter, nuevos:

“Artículo 22 bis.- Créase la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que tendrá como objeto la ejecución, reparación, mantención y explotación de obras públicas fiscales conforme al artículo 87, y la provisión de equipamiento o la prestación de servicios asociados conforme a lo establecido en el decreto supremo N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, como también la fiscalización del debido cumplimiento de las normas legales y administrativas aplicables a los contratos de concesión, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes.

La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas será un servicio que estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el Título VI de la ley N° 19.882.

La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas estará a cargo de un Director General, que tendrá la calidad de alto directivo público, de conformidad a las normas contenidas en el Título VI de la ley N° 19.882, y estará bajo la dependencia del Ministro de Obras Públicas.

El personal de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas se regirá por las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en materia de remuneraciones, por las normas del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Artículo 22 ter.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderán al Director General de Concesiones de Obras Públicas las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Someter a la aprobación del Ministro de Obras Públicas la propuesta de ejecución, reparación, mantención, conservación o explotación de obras públicas fiscales por el sistema regulado en el artículo 87 y en la Ley de Concesiones de Obras Públicas. El Ministro de Obras Públicas someterá a la aprobación del Presidente de la República la propuesta, la que deberá contar con informe del Ministerio de Hacienda.

Para el ejercicio de esta facultad podrá requerir a las demás direcciones operativas del Ministerio de Obras Públicas la asesoría técnica de las obras que sean sometidas al sistema de concesiones de obras públicas.

¹⁰ Letra g), que se deroga:

Artículo 14°.- Al Director General de Obras Públicas corresponderá:

g) Someter a la aprobación del Presidente de la República, con la anuencia del Ministro de Obras Públicas e informe del Ministerio de Hacienda, la ejecución, reparación o conservación de obras públicas fiscales por el sistema regulado en el art. 87;

- b) Dirigir y coordinar la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y de sus divisiones y la organización interna de ésta.
 - c) Representar para todos los efectos legales a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.
 - d) Contratar estudios, proyectos, ejecución de obras y asesorías en la forma que determine la ley. Asimismo, podrá celebrar los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones que le corresponden a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
 - e) Velar por el adecuado y correcto cumplimiento de los contratos de concesión en sus diferentes etapas, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su reglamento, el contrato de concesión, las bases de licitación y los actos administrativos que conforman el contrato de concesión, como también en las demás leyes y reglamentos que le fueren aplicables.
 - f) Fomentar, promover y difundir ante inversionistas públicos o privados, nacionales o extranjeros, la asociación público-privada en materia de infraestructura, en coordinación con las demás instituciones competentes en esta materia.
 - g) Presentar al Ministro de Obras Públicas, para su aprobación, dentro del primer trimestre de cada año, el plan de concesiones, con una proyección de cinco años de plazo. Este plan deberá ser previamente sometido a la consulta del Consejo de Concesiones y posteriormente enviado al Congreso Nacional para su conocimiento.
 - h) Presentar al Ministro de Obras Públicas, dentro del primer trimestre de cada año, un informe de monitoreo y evaluación de la labor fiscalizadora en las etapas de ejecución, reparación, mantención o explotación de obras públicas, con su correspondiente plan de fortalecimiento.
 - i) Estudiar, analizar y proponer al Ministro de Obras Públicas proyectos que puedan ser promovidos y ejecutados por el ministerio mediante el sistema de concesiones regulado por el artículo 87, sean éstos de iniciativa propia, de otros ministerios u organismos de la administración pública o de iniciativas privadas presentadas ante el Ministerio de Obras Públicas, de conformidad a la ley.
 - j) Evaluar, analizar y estructurar financieramente los proyectos en desarrollo, y contratar la asesoría de expertos en estructuración financiera, contractual y de garantías para las obras concesionadas.
 - k) Proponer al Ministro de Obras Públicas las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras públicas fiscales y no fiscales por el sistema regulado a través del artículo 87.
 - l) Destinar, comisionar y encomendar cometidos al personal de la dirección general a su cargo, cuando deban llevarse a cabo en servicios distintos de aquel en que se encuentra nombrado el funcionario.
 - m) Aplicar las multas que procedan en conformidad a la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su reglamento, al contrato de concesión, y a las demás leyes y reglamentos que le fueren aplicables.
 - n) Delegar en funcionarios de su dependencia, previa aprobación del Ministro de Obras Públicas, atribuciones específicas para una o más regiones o localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.
- En el acto de la delegación, el Director General de Concesiones de Obras Públicas determinará las facultades específicas que delega en el funcionario, el plazo de su desempeño y el ámbito territorial en que ejercerá su competencia.
- ñ) Todas las demás funciones y atribuciones que le encomienden las leyes.

Artículo 22 quáter.- El Director General de Concesiones de Obras Públicas, en el mes de abril de cada año, en audiencia pública, rendirá cuenta de su gestión en la dirección general.

En dicha cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas durante el período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejen, el uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieren presentado, y dará a conocer las actuaciones de la dirección general que se realizarán durante el período siguiente.”.

Artículo 2.- Desde la fecha de inicio de sus funciones, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas asumirá la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el decreto con fuerza de ley N° 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas y, por tanto, estará encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley, tenían a su cargo.

Asimismo, reemplázase en el decreto supremo N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, las menciones “Director General de Obras Públicas” por “Director General de Concesiones de Obras públicas”, “Dirección General de Obras Públicas” por “Dirección General de Concesiones de Obras Públicas” y “DGOP” por “DGCOP” ¹¹.

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 36 del decreto supremo N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas:

1. Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final:

“Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y las sociedades concesionarias, en forma conjunta o separada, podrán realizar consultas al Panel Técnico sobre las materias mencionadas anteriormente.” ¹².

2. Intercálase en el inciso cuarto, entre la palabra “discrepancias” y la expresión “que se produzcan”, los siguientes vocablos: “y consultas” ¹³.

¹¹ Coordinación.

¹² El inciso primero quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 36.- Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión, podrán someterse a la consideración de un Panel Técnico a solicitud de cualquiera de ellas. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y las sociedades concesionarias, en forma conjunta o separada, podrán realizar consultas al Panel Técnico sobre las materias mencionadas anteriormente.

¹³ El encabezamiento del inciso cuarto quedaría con la siguiente redacción:

Podrán someterse a la consideración del Panel Técnico las discrepancias y consultas que se produzcan en relación con:

Artículo 4.- Establécese una asignación especial para los funcionarios pertenecientes a la planta de profesionales de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, o que se encuentren asimilados a ella, en razón del desempeño de las funciones de regulación y fiscalización de la Dirección.

El monto de la asignación especial no podrá ser superior al 60% de la suma de las siguientes remuneraciones:

- a) Sueldo base.
- b) Asignación de los artículos 17¹⁴ y 18¹⁵ de la ley N° 19.185.
- c) Asignación del artículo 19¹⁶ de la ley N° 19.185.
- d) Asignación del artículo 6¹⁷ del decreto ley N° 1.770, de 1977, según corresponda.

La asignación especial será otorgada hasta un máximo de 72 funcionarios de aquellos a que se refiere el inciso primero, y el monto para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto expedido anualmente bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, visado por la Dirección de Presupuestos, el que deberá fundarse en criterios objetivos que considerarán los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones desempeñadas por los funcionarios.

La asignación especial se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y tributable, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. Además, será incompatible con las asignaciones de los artículos sexagésimo quinto¹⁸ y septuagésimo tercero¹⁹ de la ley N° 19.882.

Artículo 5.- La asignación especial señalada en el artículo anterior será otorgada, además, hasta a un máximo de 22 funcionarios a contrata asimilados a las plantas de Técnicos y de Administrativos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que a la fecha de su contratación cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

14 Artículo 17.- No serán aplicables, a contar del 1° de enero de 1993, respecto de los trabajadores de las entidades actualmente regidas por el artículo 1° del decreto ley N° 249, de 1974, sobre Escala Única de Sueldos, cualquiera sea su calidad jurídica, exceptuada la Comisión Chilena de Energía Nuclear, las asignaciones y bonificaciones establecidas en los artículos 1°, 3° y 11 del decreto ley N° 2.411, de 1978, en el artículo 36 del decreto ley N° 3.551, de 1981, y en el artículo 4° de la ley N° 18.717. Otórgase, a contar de igual fecha, a los referidos trabajadores, ubicados en las plantas y grados que se indican en el artículo siguiente, una asignación sustitutiva de los montos representados por las asignaciones y bonificaciones señaladas en el inciso anterior.

La asignación que otorga este artículo reemplaza las asignaciones del decreto ley N° 2.411, de 1978, y del decreto ley N° 3.551, de 1981, para los efectos de lo dispuesto en la letra b) del inciso primero del artículo 9° de la ley N° 19.104.

La asignación dispuesta en este artículo, será imponible en los términos de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 9° de la ley N° 18.675, y reajutable de acuerdo a las normas generales que rijan para el sector público. No les será aplicable, sin embargo, el reajuste dispuesto en el artículo 1° de esta ley.

15 El artículo 18 se incluye en el **ANEXO I**, dada su extensión.

16 El artículo 19 se incluye en el **ANEXO II**, dada su extensión.

17 Asignación de responsabilidad superior.

18 Asignación de alta dirección pública.

19 Asignación por el desempeño de funciones críticas

- a) Haber prestado servicios a honorarios por a lo menos cinco años, continuos o discontinuos, en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
- b) Haberse encontrado prestando servicios en calidad de honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas al 30 de noviembre de 2016.
- c) Que las labores desempeñadas a honorarios en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas hayan correspondido a la prestación de servicios para cometidos específicos y que sean de naturaleza habitual de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

Los cupos a que se refiere el inciso anterior se asignarán por una única vez y se extinguirán cuando el personal a quien se le hubiere otorgado la asignación cese en sus funciones por cualquier causal, y no podrán reasignarse a otros funcionarios. Cada vez que dicho personal cese en sus funciones, la Dirección General de Concesiones deberá comunicarlo a la Dirección de Presupuestos. La individualización de los funcionarios que percibirán la asignación especial y el monto que corresponda para cada uno de ellos será determinado por el Ministro de Obras Públicas, a propuesta del Director General de Concesiones de Obras Públicas, mediante decreto expedido bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, visado por la Dirección de Presupuestos, considerando lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4.

Artículo 6.- La asignación especial a que se refieren los artículos 4 y 5 no podrá significar un gasto total anual superior a \$545.000.000 (quinientos cuarenta y cinco millones de pesos), el que irá disminuyendo en razón de la cantidad de cupos que se extingan de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de nueve meses, contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Obras Públicas y suscritos también por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar las plantas de personal de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y dictar todas las normas necesarias para su adecuada estructuración y operación. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8²⁰ de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Asimismo, determinar los niveles jerárquicos, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Título VI²¹ de la ley N° 19.882 y las normas necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria. Además, podrá establecer las normas para el encasillamiento en las plantas.
2. Disponer el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, y podrá establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado y su encasillamiento, cuando corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.
3. Determinar la dotación máxima del personal de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo²² del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
4. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije, del traspaso y del encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
5. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de la facultad señalada en el número 1 de este artículo no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.
6. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal al que afecte:

20 El artículo 8° se incluye en el ANEXO III.

21 TÍTULO VI: DEL SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

22 Inciso segundo: El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de personal de ésta.

- a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
- b) No podrá significar pérdida del empleo, cesación de funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma impositibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.
- c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

7. Traspasar, en lo que corresponda, los bienes que determine, desde la Dirección General de Obras Públicas a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

Artículo segundo.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y transferirá los fondos necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

En el decreto señalado en el inciso anterior, se autorizará un máximo de 35 cupos para los efectos del artículo septuagésimo tercero²³ de la ley N° 19.882. En los años siguientes, se estará a lo que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas, Programa 12-02-08 Administración Sistema de Concesiones, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos para el sector público.

23 Personal que percibe asignación por el desempeño de funciones críticas.

ANEXO I

ARTÍCULO 18 DE LA LEY 19.185

Artículo 18.- Los montos mensuales de la asignación a que se refiere el inciso segundo del artículo 17 serán los siguientes:

1. Autoridades de Gobierno y Jefes Superiores de Servicio

Grado	Montos \$
A	491.740
B	482.659
C	481.294
1A	359.475
1B	352.645
1C	345.977
2	339.419
3	320.895
4	303.406
5	286.913

2. A) Directivos que Perciben Asignación Profesional

Grado	Montos \$
1C	366.053
2	339.272
3	320.601
4	302.965
5	298.055
6	257.612
7	236.575
8	212.607
9	192.777
10	176.210
11	161.797
12	148.575
13	137.811
14	126.564
15	116.243

16	106.770
17	98.077
18	97.602

2. B) Directivos que no Perciben Asignación Profesional

Grado	Montos \$
1C	228.426
2	226.082
3	223.760
4	221.459
5	219.178
6	204.271
7	189.007
8	175.657
9	163.714
10	149.155
11	136.242
12	122.713
13	116.521
14	111.411
15	104.407
16	97.347
17	91.394
18	85.906

3. Profesionales

Grado	Montos \$
4	288.827
5	261.914
6	245.015
7	232.972
8	210.297
9	193.060
10	176.463
11	162.018
12	148.764
13	137.969
14	126.690

15	116.338
16	106.833
17	98.109
18	97.602
19	91.478
20	85.451
21	79.839
22	74.613
23	69.748

4. Técnicos, Administrativos y Auxiliares

Grado	Montos \$
9	83.827
10	82.455
11	80.659
12	78.909
13	77.369
14	75.796
15	73.195
16	69.551
17	68.401
18	66.777
19	64.942
20	61.425
21	58.894
22	54.224
23	48.636
24	44.341
25	42.921
26	40.036
27	38.232
28	36.628
29	35.244
30	33.002
31	30.516

Cuando no proceda aplicar a determinados funcionarios los montos contenidos en este artículo, les corresponderá percibir las asignaciones y bonificaciones que para los demás se había declarado inaplicables por el artículo anterior, a las que tengan derecho.

ANEXO II

ARTÍCULO 19 DE LA LEY 19.185:

Artículo 19.- Sustitúyese, a contar del 1° de enero de 1993, respecto de los trabajadores regidos por el decreto ley N° 249, de 1974, sobre Escala Unica de Sueldos, exceptuados los de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y los profesionales funcionarios afectos a la ley N° 15.076, la modalidad de cálculo de las asignaciones a que se refieren el artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974; y el artículo 10 del decreto ley N° 924, de 1975, y el artículo 5° del decreto ley N° 2.964, de 1979, por los montos mensuales que se pasa a señalar:

Grado	Monto \$
A	143.030
B	140.117
C	134.789
1A	134.357
1B	131.718
1C	129.140
2	126.606
3	119.447
4	112.688
5	112.323
6	100.288
7	91.509
8	82.071
9	74.272
10	67.215
11	60.828
12	55.048
13	49.440
14	44.380
15	39.839
16	35.762
17	32.102
18	28.046
19	22.259
20	17.666
21	14.021
22	11.127
23	8.831

Cuando no proceda aplicar a determinados funcionarios la modalidad de cálculo que dispone este artículo, les corresponderá percibir las asignaciones que proceda, según la modalidad actual.

ANEXO III

ARTÍCULO 8° DE LA LEY 18.834:

Artículo 8°.- Los cargos de jefes de departamento y los de niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes de los ministerios y servicios públicos, serán de carrera y se someterán a las reglas especiales que se pasan a expresar:

- a) La provisión de estos cargos se hará mediante concursos en los que podrán participar los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por este Estatuto Administrativo que cumplan con los requisitos correspondientes, que se encuentren calificados en lista N° 1, de distinción y que no estén afectos a las inhabilidades establecidas en el artículo 55. En el caso de los empleos a contrata se requerirá haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los tres años previos al concurso;
- b) Como resultado del concurso, el comité de selección propondrá a la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, los nombres de a lo menos tres ni más de cinco candidatos pertenecientes a la planta del ministerio o servicio que realice el concurso, que hubieren obtenido los mejores puntajes respecto del cargo a proveer. En el evento que no haya un número suficiente de candidatos de planta idóneos para completar dicha terna, ésta se completará con los contratados y los pertenecientes a otras entidades, en orden decreciente según el puntaje obtenido. Para los efectos de estos concursos, el comité de selección estará constituido de conformidad al artículo 21 y sus integrantes deberán tener un nivel jerárquico superior a la vacante a proveer. Con todo, en los casos en que no se reúna el número de integrantes requerido, el jefe superior del servicio solicitará al ministro del ramo que designe los funcionarios necesarios para este efecto.
- c) A falta de postulantes idóneos, una vez aplicado el procedimiento anterior, deberá llamarse a concurso público;
- d) La permanencia en estos cargos de jefatura será por un período de tres años. Al término del primer período trienal, el jefe superior de cada servicio, podrá por una sola vez, previa evaluación del desempeño del funcionario, resolver la prórroga de su nombramiento por igual período o bien llamar a concurso.

Los funcionarios permanecerán en estos cargos mientras se encuentren calificados en lista N° 1, de distinción;
- e) Los funcionarios nombrados en esta calidad, una vez concluido su período o eventual prórroga, podrán re concursar o reasumir su cargo de origen, cuando proceda, y
- f) En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán, en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1° del Título II.